La crisis del modelo y de la democracia

En agosto pasado el gobierno declaró que Bolivia era uno de los países más democráticos del mundo.

Poco antes había amenazado al CEDIB y a otros centros de investigación con la expulsión del país. El CEDIB respondió que el gobierno no tiene la potestad de llevar a cabo esas amenazas ni las tendría en ninguna democracia, y que continuaría sus actividades haciendo pleno uso de sus derechos.

Más tarde, en este país, -de los más democráticos del mundo-, el gobierno reprimió brutalmente a los indígenas de Takobo Mora, persiguiéndolos casa por casa, porque exigían el respeto del derecho a consulta previa que pese a estar en dos tratados internacionales y en la Constitución fue de hecho anulada con un simple decreto que abre paso a las petroleras.

El decreto era parte de una serie de normas aprobadas desde hace algún tiempo que entre otras cosas abren también las áreas protegidas a las petroleras y legalizan la deforestación ilegal de la última década.

La amenaza del oficialismo es parte de una progresiva supresión de los derechos civiles, entre ellos la libre asociación civil, que por tanto no afecta sólo a las ONGs, sino a la sociedad en general. Tema, tratado aquí por Marco Gandarillas.

Toda esta política busca continuar ampliando la frontera de la explotación de los recursos naturales para exportar materias primas; este sistema que el gobierno prometió cambiar hace diez años, pero que se continúa profundizando y prácticamente introduciendo grandes cambios políticos y físicos en el territorio nacional; tema que desarrollan aquí Georgina Jiménez y Jorge Campanini.

Desde el punto de vista económico, esta política en el campo agropecuario lleva al arraigo profundo del gobierno en aquel sistema que él mismo se ha hecho mundialmente conocido por criticar, el capitalismo. Es un proceso que hemos advertido desde hace varios años y se ha coronado recientemente con la realización de la "Cumbre Agropecuaria" entre el gobierno y el agroempresariado. Este tema es analizado por Alejandro Almaráz.

Como el extractivismo no ha cambiado, sino todo lo contrario, pasó lo que, de acuerdo a nuestra larga experiencia, tenía que pasar; llegó la crisis. La crisis de las materias primas que venimos anunciado desde hace varios años. Crisis que el gobierno niega apoyándose en argumentos teóricos obsoletos e incluso absurdos como eso de que ni un precio de 10 dólares el barril de petróleo puede afectarnos.

Pero la crisis que vive el país no es sólo la de la caída de los precios de las materias primas. Hay otros componentes locales muy serios; uno de ellos la caída de las reservas de hidrocarburos e, incluido en ello, la absoluta falta de transparencia y el uso proselitista del tema, como el anuncio de grandes descubrimientos de gas justo antes del referendo. Otro componente es la crisis de la política económica del gobierno. Todos los planes o promesas del gobierno en este campo, que han alimentado la propaganda oficialista para mantener el apoyo de la población, o han fracasado o no se han realizado o se han hecho mal, o llevan una década de retraso y con problemas de corrupción.

Ante esta realidad, demasiado evidente, el gobierno se ha lanzado en una carrera desesperada por firmar contratos para la rápida ejecución de lo que no se hizo en una década. El resultado es un desorden. Tenemos por ejemplo el proyecto de energía nuclear que no tiene relación con nada y que muestra la ausencia de una política energética propiamente dicha. En este marco, escuchamos un nuevo discurso, "Bolivia corazón energético de Sudamérica"; un intento nervioso de resucitar el discurso económico gastado del gobierno, pero con muy poca sustancia material. Estos temas son tratados por Pablo Villegas.

En estas condiciones llegamos al referéndum y el resultado negativo para el gobierno ha dado lugar al reavivamiento de sus amenazas de continuar reduciendo la libertad de expresión. La democracia está en peligro. ■

La amenaza del oficialismo es parte de una progresiva supresión de los derechos civiles, entre ellos la libre asociación civil, que por tanto no afecta sólo a las ONGs, sino a la sociedad en general. Toda esta política busca continuar ampliando la frontera de la explotación de los recursos naturales para exportar materias primas; este sistema que el gobierno prometió cambiar hace diez años, pero que se continúa profundizando y prácticamente introduciendo grandes cambios políticos y físicos en el territorio nacional.